

LA PAZ EN MICHOACÁN SE LLAMA JUSTICIA

José Luis Segura Barragán

La paz y la justicia en el país han colapsado. Desde diciembre de 2006 hasta el final de 2015 más de 150,000 personas fueron asesinadas y miles más han desaparecido. No ha habido progresos en la política de control de drogas que justifiquen su permanencia tal como la conocemos y existen datos que demuestran que la estrategia de seguridad del gobierno fracasó. Tan solo en Michoacán aumentó la tasa de prevalencia delictiva de 15,000 en 2010, a 21,000 en 2014. Además, la persecución de grupos criminales por parte de las fuerzas estatales ha derivado en la multiplicación de grupos que cometen crímenes cada vez más desgarradores contra la sociedad. Mientras tanto, continúa la complicidad de estos grupos con el ejército, la Policía Federal, y los gobiernos locales. Esta situación se ha vuelto evidente en el estado de Michoacán, donde los más desprotegidos están en peligro de muerte.

La condición de pobreza es un tipo de violencia que representa una de las mayores dificultades para alcanzar la justicia y, finalmente, la paz. Además de las carencias materiales, las personas se encuentran entre dos fuegos: por un lado, el de los grupos criminales, quienes en un proceso de acumulación de tierras expulsan o asesinan a los campesinos honestos que representan un obstáculo para la comisión de sus delitos; por el otro, la complicidad de los gobernantes y las fuerzas estatales del orden con los criminales, lo cual desacredita los canales formales para conseguir justicia y reparación de daños a las víctimas.

Frente a este escenario, el 24 de febrero de 2013, en Michoacán una parte de la población tuvo una respuesta contundente. Fue entonces que sucedió un levantamiento armado de las “autodefensas” que cimbró al país. La insurgencia para instaurar un sistema de justicia efectivo dado el fracaso de las instituciones ocurrió en varios municipios. Inicialmente en Tepalcatepec y Buenavista, y en la tenencia de esta última, Felipe Carrillo Puerto, conocida como La Ruana. Los dirigentes declararon que recurrieron a las armas debido a los crímenes y abusos por parte del grupo delictivo Los Caballeros Templarios, con la complicidad de diversos funcionarios del gobierno de esa entidad federativa. Así, se mantuvo un estado de sitio que duró varios meses.

La organización de los michoacanos para autodefenderse implicó la llegada de un comisionado especial designado por el presidente Enrique Peña Nieto, el señor Alfredo Castillo, quien estuvo a cargo de dirigir la estrategia para restablecer la seguridad en la región. No obstante, la presencia de las fuerzas federales (Policía Federal, ejército y marina de México) para devolver la paz a Michoacán fue catastrófica, pues ni la figura de Castillo ni las acciones militares contuvieron a los criminales. En su presencia se extorsionaba, se cobraban cuotas, se secuestraba y se levantaba a personas. Tal era la crisis social, que el obispo emérito de Apatzingán, Miguel Patiño Velázquez, se pronunció en un llamado de auxilio al gobierno y a la sociedad que emitió el 15 de enero de 2014. El texto se tituló: “Hagamos de Michoacán un estado de derecho”. En la carta pastoral se narran algunos hechos que no han cambiado:

El Estado de Michoacán tiene todas las características de un Estado Fallido. Los grupos criminales: Familia Michoacana, Zetas, Nueva Generación y Caballeros Templarios, principalmente, se lo disputan como si fuera un botín. La Costa: para la entrada de la droga y los insumos para la producción de las drogas sintéticas; la Sierra Madre del Sur y la zona aguacatera: para el cultivo de marihuana y amapola, el establecimiento de laboratorios para la producción de drogas sintéticas y refugio de los grupos criminales. Las ciudades más im-

portantes y todo el Estado: para el trasiego y comercio de la droga, 'venta de seguridad' (cuotas), secuestros, robos y toda clase de extorsión. [...] El pueblo está exigiendo al gobierno que primero agarren y desarmen al crimen organizado. El ejército y el gobierno han caído en el descrédito porque *en* lugar de perseguir a los criminales han agredido a las personas que se defienden de ellos. ¿No han comprendido que nos encontramos en un 'Estado de necesidad'?

A pesar de la existencia de pruebas sobre la relación entre las autoridades y los traficantes de drogas, algunos miembros de las fuerzas rurales de autodefensa apostaron por la vía institucional. Ellos suscribieron un acuerdo con el gobierno para registrar sus armas e incorporarse oficialmente a las fuerzas de seguridad locales. El resultado ha sido adverso y la mayoría de las personas que hicieron este pacto se consideran traicionadas.

Los grupos de autodefensa tienen una conformación e intereses diversos. Entre los hombres que formaron parte de este movimiento hay casos ejemplares de honradez y entrega al servicio de su comunidad, y estas personas han constituido liderazgos sólidos en sus comunidades. Sin embargo, estos hombres quedaron desamparados y expuestos ante el regreso aún más violento de los criminales. Al día de hoy varios líderes han sido asesinados o encarcelados, otros más se encuentran amenazados, lo que los orilla al destierro y a formar parte de los desplazados del país.

Este tipo de acciones se suman a otras más graves que han resultado en tragedias. Una de ellas fue la matanza de niños, mujeres, hombres y ancianos campesinos limoneros de La Ruana, ocurrida el 10 de abril de 2013 en Cuatro Caminos, Nueva Italia. Los jornaleros acudieron a un evento simbólico, el aniversario luctuoso del defensor revolucionario de la tierra y sus trabajadores: Emiliano Zapata. En el evento pretendían hacer llegar demandas de protección a su trabajo ante los ataques de Los Caballeros Templarios, que habían quemado empacadoras de limón y cerrado las rutas para comercializar sus productos. Luego de enfrentar el rechazo de Jesús Reyna, representante del gobierno del estado, los

campesinos y sus familias fueron emboscados cuando iban de regreso a su comunidad. El asesinato fue atribuido al mismo grupo que los acosaba. Tres años después de esta masacre no ha habido justicia.

Otro crimen en el que estuvo implicado el gobierno sucedió el 6 de enero de 2015 en Apatzingán, cuando la Policía Federal cometió asesinatos extrajudiciales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos integró un expediente que recoge el testimonio de un testigo que narró el ataque de los servidores públicos hacia 16 civiles desarmados, dejándolos sin auxilio, abandonándonos a la muerte al margen de la carretera (lo que resultó en siete fallecimientos). Este crimen también sigue impune.

Los crímenes que se cometen nos obligan a buscar alternativas y acuerdos para que los responsables de este estado de muerte rindan cuentas ante la sociedad y enfrenten procesos de justicia judicial. Las matanzas de 2013 y 2015 son casos extremos en el cúmulo de agravios cotidianos que colocan a la violencia como eje central de nuestras relaciones. No podremos construir comunidades pacíficas sin la ayuda de las instituciones y de gobernantes que den prueba de honestidad y que estén decididos a trabajar con los habitantes de la localidad.

Los hechos violentos y la colusión del crimen con el gobierno desataron un proceso inédito de transformación en el que cuestionamos la legitimidad y la permanencia de las instituciones de gobierno y del clero tal como las conocemos. En medio de la violencia estamos obligados a construir acciones que nos den certidumbre y esperanza.

En ese sentido, la emergencia social también ha llevado a tender lazos de solidaridad ante la adversidad. Un grupo de sacerdotes de Apatzingán, Tepalcatepec, Nueva Italia, Aguililla, conformó “La Pastoral social” que ayudó a introducir alimentos, medicinas, ropa, víveres para la población. Esta organización repartió 300 despensas cada mes a las familias más desprotegidas durante el año más cruento de la violencia. Posteriormente se instalaron comedores, así como una biblioteca y un dispensario médico. La organización pastoral inició un censo sobre la población que ayuda a localizar personas enfermas y en situación de miseria, conocer sus necesidades y asistirlos.

Los retos para mantener un liderazgo social en vías de restablecer la paz tienen que ver con el desarrollo de acciones honestas, condición indispensable para la creación de una base de apoyo social que nos permita vivir en comunidad. Con base en la experiencia del trabajo hecho a lo largo de estos años de guerra en La Ruana, y actualmente en la presa del Rosario, creo que es posible ayudar sin lucrar, emprender actividades alejadas de la corrupción, del crimen y de la ilegalidad. Se pueden defender los derechos humanos y la vida misma de las personas sin atender compromisos con grupos de poder legales o ilegales que coarten nuestra libertad de decisión. Nuestra base social permitirá imaginar acciones concretas que enfrenten las situaciones de violencia. Pero para ello es condición necesaria romper el miedo y manifestar la inconformidad ante las ofensas de los criminales.

Otro reto tiene que ver con la rigidez de las instituciones eclesiásticas ante la realidad concreta que sufren las personas en la región. La falta de apoyo de algunos miembros de la Iglesia ha provocado el aislamiento de los esfuerzos por mantener la paz en zonas críticas, así como el abandono de las comunidades. Esta situación ha llevado a la desprotección de los sacerdotes, muchos de los cuales han sido asesinados por denunciar los atropellos de las organizaciones criminales y el gobierno. También se ha debilitado la figura moral del sacerdote, quien es capaz de reunir a la comunidad en torno a principios de misericordia y solidaridad. En ese sentido, los miembros de la Iglesia deberían transformar la dinámica actual al eliminar las “misas especiales” y llevar a cabo obras sociales.

La asistencia que damos en las condiciones de guerra que vivimos requiere acciones urgentes e inmediatas para salvar la vida de las personas que viven perseguidas y amenazadas de muerte, aunque esto represente a la vez la pérdida de su mayor y único sustento, para convertirse en desterrados errantes en busca de paz. Para seguir trabajando en este sentido es necesario tejer redes de solidaridad, nacionales e internacionales, que permitan salidas seguras a las familias que se encuentren sufriendo el acoso de grupos armados. Es necesaria la comunicación entre organizaciones de la sociedad civil y religiosas, particularmente de aquellas que

se encarguen de albergar y atender a víctimas de la violencia derivada del narcotráfico.

Los trabajos que hemos llevado a cabo con la sociedad civil se han visto reflejados en la integración de las mesas de seguridad y justicia de Apatzingán en las que participan activistas, funcionarios y asociaciones civiles, entre otros. Las reuniones preparatorias son itinerantes por motivos de seguridad, pero existe el antecedente de su funcionamiento en la reunión del 31 de marzo de 2015 con la presencia del secretario de Gobernación, miembros del gabinete de seguridad del gobierno federal, y los miembros locales de la mesa. Desde entonces han continuado los trabajos de discusión para generar estrategias con la participación de la sociedad.

La mesa de seguridad y justicia de Apatzingán trabaja en conjunto con otras mesas ciudadanas en distintos municipios. La agenda común incluye los siguientes temas: mecanismos de rendición de cuentas de los funcionarios, transparencia en la aplicación de los fondos públicos para la seguridad, la profesionalización y dignificación de la policía, el correcto funcionamiento de todas las instancias de justicia (procuración y administración), y prácticas de prevención del delito en las comunidades. Reconocemos que la mejor medida de prevención es el acceso a fuentes de trabajo, en especial en zonas donde los jóvenes son reclutados o forzados a participar en la cadena productiva del mercado ilícito de drogas.

Debemos mantener la memoria de los agravios para exigir una justa reparación de daños. Las ofensas en las comunidades más desprotegidas y el abandono amenaza con ahogar la realidad; por eso pensamos que, para salir de la violencia, hay que hablar de ella. Hay que nombrarla y hay que enfrentarla rompiendo el miedo y el silencio. Romper el miedo para volver a unir a la comunidad mediante acciones concretas. En esta labor es urgente que los medios de comunicación difundan las situaciones de violencia que se viven de manera cotidiana en Michoacán. Se requiere investigar y dar a conocer datos acerca de las actividades económicas del crimen organizado en la región, para encontrar las alternativas con base en razonamientos fundamentados.

Nuestro trabajo para restablecer la paz sucede en un contexto de acoso por parte de los grupos criminales. Diariamente presenciamos asesinatos inenarrables, desapariciones forzadas, tortura, ataques armados, acoso, violación. Nos han despojado de la tierra, de nuestras casas, de la tranquilidad, de la certidumbre. Nos están privando de lo más preciado: de la vida. Pero no nos han quitado la dignidad ni la esperanza, creemos en los principios de honestidad y solidaridad que han dado resultados y que contrastan con el desamparo de las autoridades institucionales.

Para acceder a la justicia por medio de las instituciones requerimos que se llame a rendir cuentas a los funcionarios responsables de la estrategia de seguridad en Michoacán, quienes deben responder por el estado en que nos encontramos. Además, se debe impartir justicia por los crímenes cometidos en nuestra región, especialmente en los casos de las matanzas de 2013 y 2015.

Dentro del contexto de guerra actual hemos presenciado la aparición de movimientos de ayuda a las víctimas, compuestos por personas solidarias que se han forjado como figuras de autoridad basadas en la ética de la honestidad y en la moral de la caridad. Este florecimiento nos da confianza para continuar defendiendo la alegría, la fraternidad, el amor, el respeto a la vida, la libertad y el trabajo digno. Nos conduce a creer que en Michoacán la paz se llama justicia.

